
CAPÍTULO 15

El centro reformista que no cuajó

Al año de ser presidente del Gobierno, José María Aznar me preguntó si conocía a Tony Blair, que acababa de ganar las elecciones generales en el Reino Unido con una aplastante mayoría. Le dije que no, pero que Paco Peña, nacido en Córdoba, había vivido cerca de Blair en Islington, en el norte Londres, y era amigo suyo porque le impartió clases de guitarra flamenca. Aznar debió tomar nota. En la Semana Santa del año siguiente, 1998, Paco Peña convidó a la familia de su antiguo alumno y vecino, para entonces inquilino del número 10 de Downing Street, a su casa en Córdoba. Después de ver las procesiones, el matrimonio Blair, sus hijos y la suegra del primer ministro británico se trasladaron al Coto de Doñana donde les esperaba la familia Aznar.

Desconocido en su tierra y profeta fuera de ella, Paco Peña (Córdoba, 1942) se había marchado a Inglaterra en 1960 con dieciocho años. Estaba harto de actuar de acompañante en tablaos para turistas en Madrid y en la Costa Brava. En Londres lavó platos, compartió cartel en un club con Jimi Hendrix y se convirtió en un virtuoso de la guitarra flamenca. Veinte años después, cuando ya había dado conciertos en el Royal Albert Hall de Londres, en el Carnegie Hall de Nueva York y en demás lugares míticos, creó un festival anual de la guitarra en su Córdoba natal. Su base siguió siendo Londres, y se instaló en un barrio obrero que se aburguesó con la llegada de artistas y políticos progresistas y pasó a ser conocido como la República Popular de Islington. A Blair, que se las daba de guitarrista

rockero cuando estudió Derecho en Oxford, le faltó tiempo para aprender algo de la técnica de su ilustre vecino.

En aquella conversación en el palacio de la Moncloa en el verano de 1997, Aznar dijo que todavía sabía muy poco de Blair, pero que presentía que se podía llevar muy bien con él. Pronto, su buena química mutua reprodujo la amistad entre Felipe González y Helmut Kohl, el canciller demócratacristiano alemán. En el Consejo Europeo las distintas etiquetas políticas de los jefes de gobierno se diluyen, y los dirigentes promueven entendimientos transversales. Puede que lo hagan para poder rebatir mejor a sus adversarios en el foro nacional de su patio particular.

Kohl, Blair, González y Aznar fueron ejemplos de los lazos entre dirigentes del norte y del sur que tienen idearios políticos enfrentados. Las relaciones son fructíferas cuando los sureños son acomodaticios con sus pares de los fabriles pagos protestantes y aspiran a ser como ellos. El romántico paisanaje mediterráneo siempre ha tenido un tremendo tirón para quienes habitan entre brumas. *Kennst du das Land, wo die Zintronen blühen* [¿Conoces el país donde florecen los limoneros?], decía Johann Wolfgang von Goethe de los limoneros italianos, y hubiera dicho lo mismo de los españoles.

Sobre el papel, el liberal conservador Aznar, al frente de un partido mayoritariamente demócratacristiano, y el socialdemócrata Blair, que impulsaba una «tercera vía» para el Partido Laborista británico, tenían mucho en común. En sus paseos por las dunas y las marismas del Coto pudieron intercambiar historias paralelas. Nacieron el mismo año, 1953, y Blair consiguió su acta de diputado en la Cámara de los Comunes en 1983, el año después de obtener Aznar el suyo en el Congreso de los Diputados. Ambos representaron un relevo generacional, ambición de liderazgo y una manera muy personal de entender la política.

Los dos sucedieron a políticos de partidos opuestos a los suyos que marcaron una época. Aznar sustituyó a Felipe González, y el primer ministro británico a Margaret

Thatcher, cuya poderosa personalidad se extendió sobre John Major, su gris pero amable sucesor conservador que fue electoralmente vapuleado por Blair. Tanto el uno como el otro se dedicaron a renovar sus respectivos partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Laborista, que llevaban muchos años en la oposición y eran percibidos por los votantes como perdedores natos. Su talismán fue el centro reformista, que es un concepto lo suficientemente amplio e impreciso para permitir mucha flexibilidad al político que lo adopta como amuleto.

Aznar y Blair compartían una ausencia de complejos y la propensión a quebrar esquemas. El liberal conservador español cuestionó la supuesta superioridad moral de la izquierda y, también, el estatismo de la derecha corporativista. El socialdemócrata británico eliminó las políticas nacionalizadoras del programa del laborismo, ninguneó a los sindicatos y se llevó muy bien con millonarios. En esto se parecían a Thatcher y a González.

Estaban muy seguros de sí mismos, tenían mucho poder sobre sus partidos y sabían muy bien lo que querían hacer. Blair era más abierto y comunicaba mejor que el adusto castellano viejo que aparentaba ser Aznar, pero los dos, de nuevo al igual que sus antecesores, eran manipuladores, fríos, calculadores e implacables cuando había que serlo. Sin el dominio de estas habilidades no se llega a ningún lado en la política.

En el plano europeo, Aznar y Blair fueron los abandonados de la apuesta por los presupuestos equilibrados y por la transparencia y la rendición de cuentas. La mutua confianza que desarrollaron les permitió patrocinar planes conjuntos para eliminar barreras a la libre circulación de bienes y servicios, para desregular el mercado laboral y para invertir en la sociedad del conocimiento.

Sus planes no tuvieron mucho éxito en Bruselas ni tampoco impactaron a sus respectivos electorados, pero fortalecieron la imagen que buscaban de políticos rompedores. Encantados de haberse conocido, formaron una alianza

natural en el Consejo Europeo que incomodaba a los alemanes y a los franceses porque actuaban de contrapoder a su prepotencia y que era aplaudida por los socios menores de la Unión.

A la vez, Aznar y Blair apostaron conjuntamente por una agenda transatlántica y por ser firmes aliados de la presidencia de George Bush en su lucha contra el terrorismo islámico. Esto, que era normal para un político británico, era inaudito en uno español. Los británicos siempre han creído tener una relación especial con Estados Unidos, y que su influencia en el imperio norteamericano tenía parentesco con la que tuvieron los griegos en el romano. En España la norma ha sido siempre el antiamericanismo y el desprecio hacia el gringo patoso y ultrajador.

La fascinación de Aznar y de Blair por Estados Unidos no hizo más que aumentar, y acabó por hundirles en el más hondo de los pozos. La amistad que les unió y que sustentó su agenda transatlántica les destinó a seguir ciegamente a Bush hasta sus últimas consecuencias con terribles resultados para los dos.

A Aznar no se le recuerda por sus exitosas políticas de liberalización económica, de privatizaciones y de fomento de la competencia, de bajada de impuestos y de un rigor presupuestario que permitió la inclusión de España en la moneda común europea. Ni a Blair por la ejemplar medida liberal que fue su estatuto de libertad de información, ni por su brindis socialdemócrata que fue la introducción de un sueldo mínimo, ni por lo astuto y tenaz que fue cuando negoció la paz en Irlanda del Norte.

No se recuerda que, cuando ambos estaban en la cúspide de la popularidad, sus dos países pegaban muy por encima de su peso en el cuadrilátero internacional, España sobre todo, y que sus respectivas sociedades crecieron en autoestima por ello. La reputación internacional de un país está ligada a la percepción mediática de su líder. En esto, Blair igualó a Thatcher en sus días de gloria, y Aznar al mejor González.

A Aznar y a Blair se les recuerda solamente por la guerra de Irak. Al dejar el poder, los dos se dedicaron a ser trotamundos. Es lo que hacen quienes no pueden estar a gusto en su país porque sus paisanos les rechazan. Ambos aceptaron ofertas de universidades norteamericanas y de consejos de multinacionales.

Aznar entró en política cuando la fruta madura había sido cosechada hacía tiempo. Su proyecto político arrancó con la afirmación de que él y quienes le acompañaban en el PP representaban lo que llamaba la «generación de la democracia». No se sentían vinculados a las dos dictaduras del siglo xx español, que se apoyaron en la derecha. Lo que hicieron fue saltarse esos «paréntesis» y enlazar con la figura de Antonio Cánovas del Castillo y con la política de la primera restauración. Con esta frescura generacional, Aznar abordó sin complejos un cambio interno en el marco del centro-derecha.

Felipe González personificó claramente en 1982 un relevo generacional, pero en su caso la renovación venía unida indisolublemente al afán por lograr una meta vital. En 1996 ese extremo había desaparecido. Al comienzo de su larga estancia en el poder, González nos explicó a un reducido grupo de corresponsales extranjeros que él estaba en política porque quería que su hijo Pablo pudiese votar al cumplir la mayoría de edad. Esto no estaba para nada en la narrativa de Aznar.

Lo que dijo González con mucha seriedad fue una de las metáforas didácticas que empleaba para explicar la historia contemporánea de España a quienes suponía que no tenían especial conocimiento de ella. Contó que él tenía treinta y cinco años cuando pudo votar libremente en unas elecciones. En la siguiente década, demócratas de la Europa del Este harían la misma reflexión para justificar su entrega a la política.

En la campaña electoral de 1996 acudí a un mitin de Felipe González organizado por las juventudes socialistas en un polideportivo en Fuenlabrada, un feudo de la iz-

quierda al oeste de Madrid que había crecido espectacularmente en la década de los ochenta. González les dijo a los jóvenes que, cuando él tenía su edad, el franquismo le había quitado el pasaporte, y que tenía que cruzar la frontera clandestinamente para reunirse con la dirección socialista en Francia. Les hablaba de un tiempo y de un país que no les era desconocido. Vitorearon y aplaudieron mucho a González, pero me pareció que le escucharon con el fingido interés que se reserva para las batallitas del abuelo.

En su propaganda televisiva de aquella campaña, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recurrió de nuevo a la imagen del dóberman de la derecha que pulveriza las libertades entre sus feroces fauces. La había divulgado ya en la campaña de 1993 y fue pistola de una sola bala. Tres años después, la bestia dejaba al electorado más bien indiferente. El PSOE estuvo muy a la defensiva en la campaña de 1996. La ola de optimismo que creó el autobús del felipismo cuando recorrió la Tierra de Campos en 1982 era ya historia.

José María Aznar (Madrid, 1953) votó a favor de la Ley para la Reforma Política en el referéndum de 1976 cuando tenía veintitrés años. Acabó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense en 1975 y un año después era funcionario de Hacienda como Inspector de Finanzas. En 1977 se casó con Ana Botella, que pertenecía, como él, a una derecha profesional e ilustrada. Aznar no tuvo los traumas policiales ni las angustias vitales que padeció Felipe González. Lo que sufrió fueron frustraciones políticas ante el imparable ascenso del líder socialista.

Aznar heredó una incuestionable manzana podrida. González legó fuertes desequilibrios económicos –siendo la desocupación de uno de cada cinco españoles en edad de trabajar el más lacerante de ellos–; una administración pública anquilosada por falta de reforma, y desmotivada y bajo sospecha por haber sido politizada; y unas instituciones deslegitimadas al estar altos cargos bajo acusación judicial.

Sin embargo, lo más problemático de la herencia que recibió el líder del PP fue que, a pesar de ese podrido panorama, el PSOE solamente perdió las elecciones de 1996 por poco más de 300.000 votos. El margen político de Aznar era escuálido. González dijo que el resultado fue una «dulce derrota».

Según Joaquín Almunia, si el PSOE hubiera perdido por mucho, el posterior debate socialista hubiera sido «una corrida en pelo» para dar con los responsables del desastre. Pero no fue una catástrofe. Al no serlo, no hubo discusión alguna sobre conductas atolondradas y nadie señaló con el dedo a culpables imprudentes: «Todos salimos muy contentos porque el resultado superó por mucho la expectativa».¹

La ausencia de autocrítica socialista dañó al PSOE y, por extensión, perjudicó al sistema bipartidista. El felipismo pudo haber iniciado un ejemplar ejercicio de rigor y de renovación, pero no mostró intención alguna de hacerlo. Había conseguido casi nueve millones y medio de votos, más del 37% de los emitidos, y no quiso enfrentarse al dato esencial, que era que había perdido el poder.

La autocomplacencia fue la consecuencia de la cerrazón y de la jerarquización del poderoso aparato del partido que estableció el PSOE como vacuna contra levantiscos marxistas y, también, para evitar las broncas de Unión de Centro Democrático (UCD). Desde entonces, el sistema político español ha huido de cualquier saludable ejercicio de catarsis. Las elecciones las ganan todos, incluso los que las pierden. El partido estigmatiza a todo el que pretende provocar un debate interno, y excomulga al que osa lavar en público la ropa sucia de sus órganos directivos.

Lo que tenía que haber hecho el PSOE después de su derrota en 1996 era reunirse en un congreso abierto y preguntarse por qué carecía de apoyos electorales en las áreas urbanas, en los sectores de más nivel educativo, entre la juventud y en las capas más dinámicas de la sociedad. No quiso hacer ese análisis a tumba abierta. Tam-

co, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, quiso el PP congregar a su militancia e indagar por qué perdió las elecciones de 2004 y las de 2008, y por qué tuvo en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 sus peores resultados desde 1991.

Los perjudicados inmediatos de las palmadas en la espalda que en 1996 se repartieron los socialistas fueron José María Aznar y el PP. Ciertamente, los 156 escaños que obtuvieron no representaban una mayoría suficiente, y esto les obligó a pactar con los catalanes de Jordi Pujol para obtener su apoyo. Esto en sí no era un problema, y González y el PSOE en su última legislatura tuvieron que recurrir al mismo soporte.

Lo grave del ajustado resultado electoral fue el cerco de exclusión al que, con la excepción táctica y pasajera de *Convergència i Unió* (CiU), se sometió a Aznar y al partido de centro-derecha que los votantes habían colocado en el poder. Desde la izquierda se les negó poco menos que la legitimidad para gobernar.

En los largos años del felipismo, la alternativa democrática estuvo ausente. Esto contribuyó a que el proceder de las instituciones que emanaban de la Constitución fuera incubado y nutrido por el partido en el poder. La Monarquía parlamentaria se convirtió en un asunto que gestionaba el socialismo, y el centro-derecha, con su parca presencia en el Congreso, se excedía en sus funciones si pretendía intervenir en ella. Para la izquierda, la desafección electoral que mantenía a raya el centro-derecha era muy explicable y era duradera.

El apego al poder de los socialistas fue comprensible, y el PSOE toleró el centro-derecha durante muchos años porque el partido de la oposición lo lideraba el «inelegible» Fraga, y era, por lo tanto, inofensivo. Comenzó a no ser inocuo cuando Alianza Popular (AP) se refundó como Partido Popular en 1989 y Aznar fue elegido su presidente el año siguiente. En las elecciones de 1993, el PP obtuvo 141 diputados frente a los 159 del PSOE.

Lo importante de aquel resultado no fue tanto la suma de los escaños sino el reparto de los votos. Con Aznar al frente, el centro-derecha sobrepasó cómodamente la barrera del 30% de los votos emitidos y se convirtió, técnicamente, en alternativa de poder por primera vez desde el desplome de UCD. En lo que sería su última legislatura como presidente del Gobierno, González fue fustigado por Aznar con la misma efectividad que la que él empleó para hostigar a Adolfo Suárez.

Al año de las elecciones de 1993, Aznar entonó en el Congreso «Váyase, señor González», frase que se hizo célebre y que el líder socialista no había escuchado en su vida. Aznar acusó al presidente del Gobierno de ser el responsable de la situación económica, del clima de corrupción y de la degradación de la vida pública. La «única salida honorable» de González era presentar su dimisión. En su réplica, González se refugió en el sempiterno recurso del debate político en el posfranquismo: «Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política, ni uno».

La condescendencia del PSOE con el centro-derecha acabó del todo cuando fue derrotado en las elecciones de 1996. Aznar, caricaturizado por su bigote «franquista», era un intruso, y su presencia en el palacio de la Moncloa ofendía a la sensibilidad democrática. No les incumbía, ni a él ni a su partido, dirigir los destinos de una España felizmente progresista.

Así como en la década de los noventa la patente en la Europa del Este para decir quién era demócrata y quién no correspondía al centro-derecha, en España la patente del *nihil obstat* democrático le pertenecía a la izquierda. Las democracias consolidadas no tienen este problema, y la cosecha de la reconciliadora fruta madura no puso fin a la conducta cainita de la política española.

Al igual que Tony Blair cuando inventó el *New Labour* de la tercera vía y se subió a la cultura pop de *Cool Britannia* –juego de palabras con el himno patriótico de «Rule Britannia»– para lavar la imagen de una socialdemocracia

envejecida y falta de ideas, Aznar tuvo que esforzarse en proyectar un perfil cívico, culto y tolerante para el centro-derecha que le permitiese participar en el espacio público.

El sectarismo fue pronunciado en el área cultural, y Aznar se dio de bruces con ello al poco de acceder al poder:

Cuando decidí asistir a un acto en torno a Max Aub, empezaron las voces de «¡Qué desvergüenza! ¡Qué expropiación!» [...]. Cuando fui a impulsar el proyecto de la Huerta de San Vicente de García Lorca, los hubo que se pusieron a decir que si García Lorca fue fusilado por la Guardia Civil y que si García Lorca era «suyo».²

Aznar intentó con buena voluntad e instinto político, y sin demasiado éxito, romper los muros de la intransigencia necia. La desvergüenza hubiera sido decir que pensaba como Max Aub. Lo que Aznar quiso resaltar eran los valores morales y literarios del autor que se exilió al caer la Segunda República y murió en México. Admiraba aún más a García Lorca, y fue a honrar la memoria de un poeta universal en la Huerta de San Vicente porque era la «tarea integradora y de entendimiento que se podía y se debía hacer».

La vida de UCD fue demasiado efímera para superar las «dos Españas», si esto fuese posible, y Manuel Fraga Iribarne fue siempre, en la percepción pública, el representante de una de ellas. Felipe González entendió la integración y tuvo la sensatez de decir que una guerra civil «no se conmemora» con ocasión del medio centenario de 1936. El sentimiento compartido desde la derecha hasta la izquierda en la generación de González fue el de «nunca más».³

En las Cortes Constitucionales de 1977, González afirmó que la Transición legislaba «para superar el pasado e impedir la vuelta de aquel clima que fue tan dañino para España». En ese espíritu se redactó la Constitución. Pero algunos del PSOE llevaban el sectarismo en su ADN. José Luis Rodríguez Zapatero no era Felipe González. Fue un

exaltado que llegó a preocupar seriamente a los veteranos del socialismo hispano.

Aznar no tenía complejos, representaba la «generación de la democracia» y pugnó por desligar a su partido de los condicionantes del pasado reciente. Su interpretación de la guerra civil, por ejemplo, estaba en cierta manera en línea con la de su abuelo paterno, Manuel Aznar Zubigaray, periodista liberal en la Segunda República y embajador de Franco en la ONU:

Manuel Azaña lo vio desde el primer momento cuando dijo el mismo día que comenzó la sublevación que, ocurriese lo que ocurriese, lo que estaba claro era que «nuestra República» se había terminado. Es decir, no mueren 500.000 españoles porque Santiago Casares Quiroga es presidente del Gobierno. Mueren para hacer una revolución de un signo o de otro. Y eso, evidentemente, condiciona muchas historias.⁴

El recuerdo de Casares Quiroga es bastante inédito en la clase política contemporánea. Salvo estudiosos de la época y algunos paisanos suyos, pocos sitúan al poco resolutivo azañista gallego. Nombrado presidente del Gobierno en mayo de 1936, Casares Quiroga dimitió el 19 de julio, el día siguiente de la sublevación. De haber seguido en su puesto, es posible que la historia –y las muertes– hubiera sido otra porque se negó a distribuir armas a las organizaciones obreras en Madrid.

Para Aznar ninguna de las dos Españas que se enfrentaron en la guerra civil tenía tradición democrática. Según su enfoque de la historia contemporánea española, el franquismo fue sólo «una parte de la historia de la derecha». Una parte de la derecha colaboró con la Segunda República y, para el caso, Francisco Largo Caballero y la Unión General de Trabajadores (UGT) colaboraron con la dictadura del general Primo de Rivera. La izquierda, por otro lado, tuvo poco que ver con el intento canovista de ordenar democráticamente la convivencia española.

La actitud de Aznar ante el Régimen fue tajante. El franquismo no iba con él ni por mentalidad ni por edad. Le exasperaba la atribución de los estereotipos de la derecha franquista y reaccionaba con irritación con quienes se lo echaban en cara: «Mire usted, nosotros no somos actores de nada que no sea incorporarnos a la vida política cuando comienza la democracia, una democracia que habíamos deseado».

Su muestra de credenciales democráticas encaja con su cita de Francisco de Quevedo en el temprano testamento político, *España, la segunda Transición*, que publicó dos años antes de ganar las elecciones de 1996: «Ha sido preciso decir lo que fuimos, para disculpar lo que somos y encaminar lo que pretendemos ser». ⁵ Lo que pretendía ser Aznar quedó bastante claro en este ensayo. Alzó la bandera de la libertad, lo cual es algo novedoso en quien pretende dirigir al centro-derecha. Lo normal era predicar orden y prosperidad.

En *España, la segunda Transición*, Aznar explicó que concebía la libertad «como la entendían [John] Locke, [John] Stuart Mill, [Alexis de] Tocqueville y [Melchor Gaspar de] Jovellanos. La libertad es la preservación de un espacio propio para cada individuo, dentro del cual puede actuar, elegir y decidir sin interferencia ni control alguno». Para ser libre hay que poder elegir y una buena elección requiere un discernimiento moral. Aznar, por ello, citó a Tocqueville: «Jamás existió una sociedad libre sin moral». Y a Karl Popper: «Hay que jerarquizar qué valores son fundamentales y ser consciente de que al ordenarlos se está tomando una opción moral».

Las lecturas y las reflexiones de Aznar sobre la «libertad» fueron disruptivas en el contexto político de aquel momento porque de ella ya se habían encargado los socialistas en el tardofranquismo y al comenzar la democracia. El concepto era «suyo» y Aznar se metió en su terreno. Los eslóganes del PSOE en la Transición incluían «Socialismo es libertad» y «La libertad está en tu mano». Igual que

Adolfo Suárez le robó el «centrismo» a Manuel Fraga y Felipe González se lo robó a Suárez, José María Aznar le robó el «centrismo» a González después de catorce años de felipismo. También le robó a González la «libertad».

Aznar podía tener ideas muy claras para marcar su particular «tercera vía» política, pero no estaba tan claro que el rebaño del centro-derecha fuera a seguirle por ese sendero. En el PP predominaban los demócratacristianos. Esto representaba un problema para un político que quería dinamizar la economía con medidas desreguladoras y quitando grasa a la burocracia administrativa. Los valores morales del socialcristianismo y de la doctrina social de la Iglesia se reconocen en el Estado benefactor.

El franquismo injertó el estatismo y el corporativismo a la fruta madura y los legó a la sociedad española junto con el deseo, no anticipado por la dictadura, de reconciliación y el ansia de la normalización política. El gran Estado protector que debilita la sociedad civil era patrimonio tanto de la derecha como de la izquierda española. El sacrosanto espacio particular de cada individuo para actuar, elegir y decidir sin interferencia no tenía cabida en la cultura política, ni con el Régimen ni después.

Para Aznar fue más difícil imbuir de liberalismo al centro-derecha español que para González borrar el marxismo como seña de identidad del PSOE. O para Blair acabar con la planificación y las nacionalizaciones en la patria de John Locke y de Stuart Mill, y donde vivió y murió Karl Popper. La prueba es que no lo consiguió, o lo consiguió sólo a medias. Cuando Aznar dejó el poder, la España del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines oficiales de las diecisiete autonomías seguía siendo mucho más intervenida, dirigida y regulada de lo que deseó al llegar al Gobierno. Si se examina el barullo del partido que heredó de Fraga, el poco éxito de Aznar es explicable.

Fraga incorporó a todo el que se le acercaba. Cristianos, liberales, franquistas evolucionados, centristas desencantados y, por supuesto, oportunistas y arribistas múltiples que

se representaban a sí mismos. A todos les dio la bienvenida el gran patrón del centro-derecha. Al final de la época de Fraga, Alianza Popular (AP) tuvo hasta siete vicepresidencias que representaban a supuestas distintas «familias» del centro-derecha.

Darse de alta en AP fue fácil porque el partido era elástico. El discurso de Fraga en la democracia fue algo tan indefinido como el introducir cambios con deferencia a la tradición. Su estrategia fue la de sumar y sumar con voracidad, y su horizonte fue que ya saldría lo que Dios quisiese. Por eso le gustaba emplear el muy celtíbero dicho popular: «Si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción».

Para un político metódico como Aznar, el planteamiento de «atrapalotodo» de Fraga no era la mejor receta para cohesionar un partido. Aznar se cargó de un plumazo las siete vicepresidencias cuando en 1990 fue aclamado como presidente del partido en el congreso que el centro-derecha «refundado» como PP celebró en Sevilla. Fraga le pidió que al menos mantuviese a dos vicepresidentes, y Aznar se negó. Fue la condición que puso para sucederle.

En su defensa como fundador y conductor de AP, Fraga dijo fundamentalmente dos cosas. Una fue que creó un sólido partido:

Hay una cosa evidente. De la obra de Suárez se dirá lo que se quiera, pero su partido no ha perdurado y el nuestro ahí está, gobernando desde una base social más profunda. Yo me dediqué a hacer partido y creo que no he perdido el tiempo.⁶

Esto solamente es cierto si la solidez se refiere a una más bien opaca solvencia económica, si bien la de AP era luminosa en comparación con la tesorería del PSOE en el gobierno y en las administraciones. Y si se refiere a un holgado cuartel general en la madrileña calle Génova, una presencia proactiva en todo el país, y mucha militancia.

A pesar de ser docto en la Teoría del Estado y llevar todos los programas de gobierno habidos y por haber en la cabeza, Fraga no le dio una estabilidad doctrinaria al partido que creó. Cualquiera podía beber el cóctel de cambio y tradición que confeccionó. González llegó a decir que Fraga llevaba «el Estado en la cabeza». Se permitió el cumplimiento porque el líder del centro-derecha, con su pasado autoritario y su presente ideológicamente ecléctico, no representaba amenaza alguna desde las filas de la oposición.

Víctor Alba, un trotskista enciclopédico que en el invierno de 1936 introdujo al George Orwell de *Homenaje a Cataluña* en las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), comparó a Fraga con Gaspar Melchor de Jovellanos: «Si Jovellanos estaba contra los radicales, igualmente se opone a los reaccionarios [...] la reforma, para ser real, ha de ser gradual, no puede ser repentina».⁷

Fraga recomendaba el ensayo de Alba sobre el conservadurismo español, y le gustó la referencia a Jovellanos. Desde las antípodas políticas que les separaban, el respeto y la consideración entre los dos fueron mutuos. Puede que Fraga se dijese que, al igual que el liberal conservador asturiano, él también fue un incomprendido para muchos de su época.

La otra barricada que Fraga levantó para defender su paso por la democracia parlamentaria fue que mereció la confianza de la generación que le siguió. Dijo que una forma de ganar esta confianza consistió en dar a tiempo los poderes a quienes vienen por detrás: «Preparé cuidadosamente la sucesión; busqué mucha gente capaz, hicimos lo posible para formarles y luego no les tuvimos ahí esperando treinta años. Se les dio paso a tiempo».⁸

La referencia de Fraga a los «treinta años» expresa la frustración que sufrió por el tiempo precioso perdido durante la larga «espera» del franquismo. En todo caso, su sucesión no fue tan cuidada cuando dimitió como presidente de AP después de los desastrosos resultados para el centro-derecha en las elecciones de 1986. El centro-dere-

cha tuvo que esperar casi cuatro años para dar con el líder idóneo de la siguiente generación

La entrega por Fraga del testigo a una nueva generación no fue un ejemplo de transparente pulcritud ni mostró los fluidos mecanismos sucesorios que se esperan de un partido político moderno que está abierto a la promoción de los mejores. Según el liberal conservador Miguel Herrero de Miñón, ponente de la Constitución que pasó de ser portavoz parlamentario de UCD a serlo de AP, «Fraga siempre había considerado a Alianza Popular como una finca de su propiedad».⁹

Herrero de Miñón se postuló para suceder a Fraga, y su candidatura estaba avalada por su poso intelectual y por su brillantez parlamentaria. Sin embargo, en el congreso que AP celebró en Barcelona en febrero de 1987 ganó la de Antonio Hernández Mancha (Guareña, Badajoz, 1951). Ocurrió que Fraga movió a sus peones para acudir al quite de su protegido.

Hernández Mancha era un locuaz abogado de Estado de treinta y cinco años que llevaba siete como presidente de AP en Andalucía y era diputado por Córdoba y portavoz del partido en el Parlamento andaluz. Ocupó la presidencia nacional de AP porque así lo quiso Fraga, y fue aupado a ella por una ola de populismo que surgió de esa «más profunda» base social que el fundador del partido presumió haber creado

Fraga no dudó en articular esta base a la hora de nombrar a su sucesor. Hernández Mancha era «suyo», mientras que su rival era un verso suelto. Herrero de Miñón, el letrado del Consejo de Estado que en su día escribió *El principio monárquico* para iluminar la reforma política posfranquista, era un hombre de Estado en potencia. La decisión de apartar a Herrero de Miñón de la dirección de AP posiblemente fue una cuestión de celos y, desde luego, fue un error.

Como líder del centro-derecha, Hernández Mancha fue un «desastre sin paliativos» más. Se metió en muchos char-

cos, entre ellos una calamitosa moción de censura que presentó contra Felipe González en el Senado, donde la mayoría socialista era tan abrumadora como en el Congreso. Hernández Mancha quiso darse a conocer a nivel nacional con su intervención, y lo que consiguió fue presentar una imagen deplorable. Alfonso Guerra se encargó de triturarle.

Al año, Fraga se vio obligado a tomar de nuevo las riendas de la presidencia del partido y a ensayar otra vez su sucesión. Esta vez el elegido fue José María Aznar, que para entonces era presidente de la Junta de Castilla-León y, como tal, tenía una base territorial. Aznar fue el candidato de una nueva generación de políticos que, como él, llegaron al grupo parlamentario de AP en las elecciones de 1982. Entre ellos estaban Rodrigo Rato, Loyola de Palacio y Federico Trillo, la orientación política que compartían era liberal y serían el núcleo duro del proyecto de gobierno de Aznar.

La elevación de Aznar y de sus correligionarios a las alturas de AP fue en, cierto modo, la venganza de Herrero de Miñón. Aznar dirigió la campaña de Herrero de Miñón en su infructuoso intento de suceder a Fraga, y todos ellos habían sido instruidos por él en las doctrinas liberal-conservadoras cuando iniciaron su andadura parlamentaria. Las lecciones del autor de *El principio monárquico* incluyeron el respeto a la política de la primera restauración, la admiración por el sistema parlamentario británico, el escepticismo ante el dirigismo de la Unión Europea, la ausencia de complejos a la hora de abordar una agenda transatlántica, y el convencimiento de que España formaba una comunidad social y políticamente «normal».

En teoría, la generación que tomó el relevo en una Alianza Popular convertida en Partido Popular representaba un conjunto de ideas y de conductas que modernizaba el centro-derecha. Lo «desfranquizaba» porque el Régimen ya era «historia» y también porque Aznar y los suyos se oponían a la jerarquización y al estatismo. Tomaban el relevo para conducir España hacia esa *segunda Transición* que

proclamó Aznar en su ensayo político dos años antes de ganar las elecciones de 1996. El reto era apartar la manzana podrida del cesto de frutas, introduciendo prácticas de transparencia, representatividad y rendición de cuentas.

Aznar y sus correligionarios tenían un cheque en blanco para darle la vuelta al centro-derecha como un calcetín. Cuando se hicieron con el partido en el congreso de Sevilla en 1990, AP llevaba perdiendo, una tras otra, las cinco elecciones que se habían celebrado desde la restauración de la democracia, y sus mejores resultados estaban en torno al 25% de los votos emitidos.

El patético recorrido electoral mostraba palmariamente que el estilo del liderazgo de Alianza Popular no estaba en sintonía con el votante y que tampoco lo estaba, por llamarlo de alguna manera, el cuerpo doctrinal del centro-derecha. El barullo que provocó la sucesión de Fraga puso en evidencia ambas cosas.

El concepto patrimonialista que tuvo Manuel Fraga del centro-derecha era excusable, y a Felipe González se le podía imputar lo mismo en el centro-izquierda. Fraga, el fundador del partido, se había entregado en cuerpo y alma a AP y era el dueño del inmueble. Lo que no fue disculpable en el congreso de la sucesión en Barcelona fue que sus antenas políticas estuviesen tan atrofiadas. Esto no correspondía a alguien de su talla, experiencia y vocación de servicio público.

El apoyo que Fraga prestó a Hernández Mancha fue decisivo pero extremadamente torpe. El joven extremeño-andaluz tenía una oratoria, a medio camino entre encendida y barriobajera, que encandilaba a los delegados de AP y espantaba a los parlamentarios del partido. Cuando Herro de Miñón le ofreció retirarse de la pugna por la presidencia y ser el secretario general en una candidatura de integración, Hernández Mancha rechazó la propuesta diciéndole «no me mola».¹⁰

Por otro lado, el incuestionable entusiasmo que despertó Hernández Mancha entre las bases de AP, para lo que resul-

tó ser una muy fugaz presidencia, reveló la poca cultura política del centro-derecha para operar con efectividad en una democracia parlamentaria de partidos competitivos. El aparato del fraguismo tenía el congreso de Barcelona controlado, y Hernández Mancha, a pesar de su poca talla política a nivel nacional, ganó por goleada con 1.430 votos de los delegados frente a los 729 de Herrero de Miñón.

El centro-derecha se dejó guiar por el dedo de Fraga y pareció entender que la juventud, el desparpajo, el descaro y el gracejo de Hernández Mancha constituían habilidades sobradas para desbancar a Felipe González. Optó por un populismo sin fundamentos doctrinales y eligió para dirigir al principal partido de la oposición parlamentaria a un político que no tenía escaño en el Congreso de los Diputados.

Los delegados en aquel malhadado congreso de sucesión demostraron no entender demasiado bien que la democracia parlamentaria se apoya principalmente en la confrontación en el Parlamento de partidos liderados por parlamentarios. Se diría que a Fraga, que incesantemente se recorría España de punta a rabo «creando partido», se le había escapado explicar este detalle de la nueva arquitectura política. Al votar masivamente la candidatura de Hernández Mancha los delegados parecían despreciar, o al menos, minusvalorar, el papel del parlamentarismo. Se decantaron por el populismo.

Herrero de Miñón quiso quitar hierro al aparente populismo y poco apego a la democracia representativa de los seguidores de Hernández Mancha:

Yo no creo que los delegados no apreciaron las figuras parlamentarias y el Parlamento. Más bien los delegados fueron ante todo sensibles a las orientaciones que recibieron de la secretaría general del partido y del propio señor Fraga.¹¹

Si fue así, las lecciones de aquel congreso de Barcelona son todavía más sombrías. Cabría decir que la tentación caudillista que encarnaba Fraga estuvo presente en la ele-

vacación de Hernández Mancha a la presidencia de AP. Se había seguido con adhesión inquebrantable a Fraga porque era el líder, y se seguiría a quien el líder dijese. Sobraban debates doctrinales y planteamientos estratégicos.

El nuevo líder no tenía que ser el más preparado ni el más conveniente para el cargo. Solamente tenía que ser el que el anterior líder señalara con su dedo. Tampoco era necesario que el líder que designaba a su sucesor hubiese acumulado muchos logros electorales que acreditaran la sagacidad de su elección. Era el líder y eso bastaba.

La tentación caudillista, o populista, se hace presente tanto en la derecha como en la izquierda cuando los diputados carecen de cercanía con los votantes y el Parlamento es percibido como una institución lejana, poco representativa y de utilidad cuestionable. Esto mismo es una fatal característica del sistema político español, consecuencia de una ley electoral que primaba el control de los partidos por encima de la valía de los políticos.

Los aparatos de los partidos son los propietarios de los escaños porque son ellos los que elaboran la lista, bloqueada y cerrada, de candidatos para una circunscripción electoral. El parlamentario ni es el dueño de su escaño ni tiene por qué conocer a los votantes que le eligieron. Su obligación en el Parlamento es seguir fielmente las directrices de su partido. Representar a los votantes de su circunscripción electoral, sean o no partidarios suyos, es secundario.

A los diez años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, los delegados en el congreso que AP celebró en Barcelona y el propio presidente del partido mostraron poco aprecio por el parlamentarismo. No les impresionó la notoriedad de Herrero de Miñón en su distrito electoral de Madrid, ni la capacidad dialéctica del portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Tampoco tuvieron interés en su doctrina, muy pedagógicamente expuesta, de que AP tenía que «avanzar hacia el centro» para recuperar los votos «prestados» que mantenían al felipismo en el poder. Los delegados optaron por el populismo y lo hicieron de

manera masiva al percatarse de que Hernández Mancha era el preferido por Fraga y su aparato.

Aquella elección indicó que la Monarquía parlamentaria fallaba porque el sistema representativo no había echado raíces entre la ciudadanía. Ni siquiera entre los militantes de un partido parlamentario cuya función principal era marcar y enmendar en lo posible la labor del Gobierno. Ciertamente, esta labor no daba resultados puesto que la mayoría del PSOE en el Congreso era aplastante y las posibilidades de sustituirla eran nulas en el medio plazo. Sin embargo, la Monarquía parlamentaria se asentaba en el bipartidismo y el hemiciclo era el lugar en el cual se ofrecían políticas alternativas.

La elaboración de la ley electoral fue una consecuencia clave de la cosecha de la fruta madura, y su principal objetivo fue crear un sistema de representación parlamentaria que facilitaría la alternancia en el poder de dos partidos. Por ello, se estableció un sistema proporcional corregido que favorecía a los partidos más votados. Con el fin de reforzar el control de los dirigentes políticos, se implantó el mecanismo por el cual el aparato nombrado por ellos decidía quiénes, y en qué orden, figuraban en las listas de candidatos que se presentaban en cada provincia.

Al redactar y aprobar el reglamento para dirimir las futuras elecciones, la clase política de la Transición creó un híbrido entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. El balance se inclinó siempre hacia el primero. Con la ley electoral florecieron el hiperliderazgo y el control del aparato, y se pudrió la manzana.

La intención de la ley fue, en principio, sensata. Se quiso establecer el campo de juego que permitiese la alternancia del poder que imperaba en las ansiadas democracias «de corte europeo» y evitar la fragmentación política —lo que se llamó la «sopa de letras» ante el aluvión de partidos en 1977— que acabó por desacreditar el sistema parlamentario de la Segunda República. Cumplió con este objetivo en las elecciones fundacionales de 1977 y en las de 1979,

después de la aprobación de la Constitución. Pero no pudo evitar la crisis política que se desató en el invierno de 1980. La implosión de UCD, el frustrado golpe de Estado y la avalancha electoral del PSOE dos años después demostraron que el bipartidismo, además de imperfecto, era disfuncional.

A los diez años de la cosecha de la fruta con la Ley para la Reforma Política, el Congreso de AP en Barcelona expresó con su opción populista el desencanto del centroderecha con un parlamentarismo que le excluía del poder. Más de dos décadas después, el cuestionamiento del sistema vino por parte de la izquierda. El eslogan «no nos representan» y la aparición de una propuesta política populista en toda la regla reflejó la brecha que la restrictiva ley electoral había abierto entre el votante y el político.

La historia europea del siglo xx demuestra cómo los sistemas de representatividad que establecen las democracias se pueden quebrar cuando una fuerte recesión económica acelera la desigualdad social y tensa los consensos constitucionales. En la primera década del XXI se reprodujeron los mismos retos, y los remedios seguían siendo iguales. Cuanto más abierto y flexible sea el procedimiento parlamentario, más eficaz será su capacidad paliativa en tiempos de turbulencia.

En España, la reforma de la Ley electoral con el fin de regenerar el sistema de representatividad comenzó a dominar el debate político en la primera década del siglo XXI. A los cuarenta años de la muerte de Franco, la democracia parlamentaria que sustituyó al Régimen acusaba el desgaste, y el bipartidismo, la «partitocracia», que fue el término despectivo que empleaba el franquismo, sufría desmoches.

Manuel Fraga se dio cuenta del error que cometió apadrinando a Hernández Mancha y lo corrigió. José María Aznar demostró con su victoria en las elecciones de 1996 que la alternativa en el poder era posible. El bipartidismo funcionaba a pesar de estar viciado por el control de los aparatos. Sin embargo, Aznar decepcionó a quienes espe-

rabán de él un reforzamiento del sistema parlamentario y la creación de un campo más abierto y nivelado para el juego competitivo de partidos políticos.

Aznar pudo haber fomentado una reforma de la Ley electoral y un reglamento mucho más ágil para los debates en el Congreso. Pudo haber creado el consenso necesario para reconfigurar el Senado y convertirlo en una cámara territorial relevante. Pudo haber dado ejemplaridad al arco parlamentario patrocinando el debate interno y la transparencia en el PP. Pudo haber profesionalizado, es decir, despolitizado, la administración pública.

A los veinte años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las lecturas liberales de Aznar y su conocimiento de la separación de poderes en los sistemas políticos anglosajones le daban pie para todo ello y para mucho más. Era el conjunto de ideas y de conductas que compartían muchos que alcanzaron el poder con él. Sin embargo, el PP no abordó con la diligencia que muchos deseaban la limpieza de una vida pública cuya degradación el mismo Aznar se había encargado, tan justificadamente, de señalar. La corrupción que denunció con tanta efectividad resultó no ser, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de un socialismo prepotente. La manzana siguió pudriéndose bajo su mandato.

Aznar tuvo margen para actuar porque superó con aplomo las sectarias zancadillas de la pretendida superioridad moral de la izquierda, y su credibilidad como presidente del Gobierno se afianzó. El PSOE, cuando por fin digirió su derrota, perdió el norte, que es lo que le ocurre a todo partido gobernante cuando pasa a la oposición. En los cuatro años de su primera legislatura, Aznar tuvo enfrente a tres líderes de la oposición. Despachó a Felipe González que estaba de salida; a Josep Borrell, exministro de Obras Públicas, que no acabó de entrar porque el aparato socialista le fulminó; y a Joaquín Almunia, hombre fuerte del felipismo, que en las elecciones de 2000 cosechó los peores resultados para el PSOE desde las de 1979.

La prioridad de Aznar fue sanear las cuentas públicas, reducir la inflación y estimular el crecimiento económico para que España estuviese en la parrilla de salida de la eurozona. La tarea era muy compleja porque, no por última vez, el PSOE legó un balance muy deteriorado. Se equivocaron quienes dudaron que Aznar fuera capaz de alcanzar la meta que se marcó.

El haber económico de Aznar fue abultado e incuestionable. No lo fue en lo político. Al año de llegar al poder, habló de un proyecto liberal y abierto:

Liberal en sus fundamentos ideológicos y también en su capacidad de diálogo. Estos son momentos, digamos, de etiquetado difícil, pero si hubiese que apostar por algo sería fundamentalmente por eso. En las convergencias de las políticas que se practican es a veces difícil entender las diferencias e incluso ver los matices. Pero lo básico es que España necesita que cuaje un proyecto llamémosle liberal, de amplias raíces populares y capaz de comportarse correctamente en el gobierno.¹²

Solidificar tal proyecto requería acometer reformas de calado que mejorasen la conducta, la ejemplaridad y, a fin de cuentas, la representatividad del sistema político.

Pero esto no estaba en la libreta de Aznar. Dejó pasar la oportunidad de neutralizar el poderío de los aparatos de los partidos y favorecer, «desde arriba», una regeneración «desde abajo» que facilitase la presencia en la vida pública de los mejores y de los más decentes. Lo que quiso Aznar fue cohesionar un centro-derecha en el cual estaban presentes corrientes conservadoras, demócratacristianas y liberales. Su preocupación inmediata fue la de reorganizar internamente el PP para que tuviese «tres características básicas que no tenía en ese momento. Una es ser una fuerza mayoritaria; otra, ser una fuerza centrada, y otra, ser una fuerza política unida».¹³

Lo primero sólo valió para la siguiente legislatura. El PP, como fuerza mayoritaria, no pudo superar el tsunami

populista que articuló la izquierda con la matanza terrorista en vísperas de las elecciones de marzo de 2014. El afianzamiento de lo segundo es debatible de la misma manera que el «centrismo» es un concepto de amarre político del cual se ha abusado en demasía. La unión en cuanto a cohesión orgánica y territorial también. Al PP le crecieron los «enanos», o los «barones», y en esto no se distinguió del PSOE.

En la segunda legislatura de Aznar, la percepción pública fue que el Gobierno se escoró hacia la derecha y, peor aún, hacia el neoliberalismo que para la izquierda era el nuevo ogro en el escenario político. De nuevo en la oposición, el PP tuvo dificultad para proyectarse como la opción de una sensatez «centrada» frente al «buenismo» reinante que ofrecía «derechos» que la «derecha» negaba.

El PP recuperó el poder no tanto porque representaba el sentido común de un partido unido en torno a la modernidad y la moderación, sino porque el PSOE perdió el poder con su manifiesta incapacidad económica.

Lo que José María Aznar no consiguió legar ni a su partido ni, mucho menos, al electorado fue todo lo que conllevaba la agenda transatlántica que tan entusiastamente abrazó en compañía de Tony Blair. Esto fue una innovación rompedora en la política española, pero fue una deriva muy personal suya que no logró explicar debidamente al electorado. No transmitió, como pudo haber hecho, los valores de una sociedad abierta e inventiva y de una sociedad civil robusta y dinámica.

El centro político no vio en la agenda transatlántica más que un belicismo trasnochado que le incomodaba. Con el apoyo de Aznar a la invasión aliada de Irak, la izquierda encontró la llave para recuperar el poder. En cuanto Aznar se apartó por decisión propia de la primera línea de la política nacional al cumplir dos legislaturas, la agenda transatlántica, en su sentido más amplio, desapareció de la conversación del PP.

Puede que el juicio final sobre Aznar sea que le faltó ambición y le sobró desconfianza. Su decisión de nombrar

directamente a su sucesor fue la continuación de las peores prácticas de la vieja política. Fraga, al menos, intentó disfrazar su autoritarismo con la celebración de congresos amañados. De haber sido, de verdad, el PP una fuerza mayoritaria, centrada y unida, la sucesión de Aznar la hubiera resuelto un proceso transparente como ocurre en las «democracias de corte europeo.» Y el partido hubiera controlado al líder en lugar del líder al partido.

Un viejo dicho político es que las carreras de los dirigentes de la cosa pública acaban en el llanto y el crujir de dientes. El comienzo de la de Aznar fue esperanzador, pero fue así como terminó su paso por el poder. Veinte años después de que España soltara amarras con el franquismo y comenzara la Transición con la fruta madura a bordo, con Aznar existió la posibilidad de enmendar el trayecto hacia aguas cristalinas y vientos apacibles. Después de él, la nave tomó un rumbo progresivamente pantanoso. Cuarenta después, la mercancía estaba muy podrida.